

ISBN 968-5153-80-9

Impreso en México.

Printed in Mexico.

D.R. © Suprema Corte de Justicia de la Nación

**PROYECTO DE LEY DE AMPARO
REGLAMENTARIA DE LOS
ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS**



SCJN

**BIBLIOTECA DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION**

**MÉXICO
2000**

LE
I150
P769p

LA EDICIÓN DE ESTA OBRA ESTUVO AL CUIDADO
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMPILACIÓN Y
SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Coordinador General: Ministro Humberto Román
Palacios
Ministro Juan N. Silva Meza
José Ramón Cossío Díaz
César Esquinca Muñoa
Héctor Fix-Zamudio
Javier Quijano Baz
Manuel Ernesto Saloma Vera
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

29-Agosto-2000

PRESENTACIÓN

Sin duda alguna, la sociedad mexicana actual demanda mayores garantías y controles frente al poder, por lo que constantemente se empeña en arbitrar y perfeccionar instrumentos de preservación de los derechos y de limitación al poder, como el juicio de amparo. Consciente de ello, el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mi conducto, invitó a toda la comunidad jurídica nacional a formular propuestas para la elaboración de un nuevo texto regulador del juicio de garantías.

Al mismo tiempo, este Alto Tribunal constituyó la *Comisión de Análisis de propuestas para una Nueva Ley de Amparo*, integrada por los Señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Humberto Román Palacios, Presidente de la Comisión, y Juan N. Silva Meza; por los Magistrados de Circuito César Esquinca Muñoa y Manuel Ernesto Saloma Vera; por los connotados académicos José Ramón Cossío Díaz y Héctor Fix-Zamudio, así como por los reconocidos abogados postulantes Javier Quijano Baz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Una vez constituida formalmente, la Comisión inició de inmediato con los trabajos: convocó a participar, recibió, sistematizó, discutió y ordenó las propuestas para, finalmente, redactar un proyecto de nueva Ley de Amparo.

Este proyecto es, pues, producto de largas jornadas de trabajo por parte de los integrantes de la Comisión, de análisis profundos y discusiones técnicas sobre las mil cuatrocientas propuestas recibidas, que afectaron prácticamente a la totalidad del ordenamiento vigente.

Ante este meritorio e invaluable trabajo, se estimó conveniente publicar el proyecto de una nueva Ley de Amparo que hoy me honro en presentar, permitiendo con ello que la comunidad jurídica lo conozca, *lo analice y participe en el Congreso Nacional de Juristas* que próximamente se celebrará, con el fin de obtener un texto definitivo que se hará llegar posteriormente al Congreso de la Unión para que este órgano representativo se pronuncie al respecto.

De esta forma, y debido a la importancia que para la vida jurídica nacional tiene el juicio de amparo, hago una cordial invitación a los Señores Consejeros de la Judicatura Federal, Magistrados y Jueces, Docentes, Investigadores, Académicos, miembros de Asociaciones de Abogados, Colegios y sociedad civil en general, para que, razonadamente, hagan llegar sus opiniones y comentarios respecto de los temas, artículos, párrafos o fracciones de este proyecto de nueva Ley de Amparo, a cualquiera de las siguientes direcciones:

1. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pino Suárez número 2, Tercer piso, Puerta 4063, Colonia

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, Código Postal 06065.

2. Fax (015) 130-12-19.

3. Correo electrónico:

nuevaleyamparo@mail.scjn.gob.mx

Desde luego, cualquier aporte mediante opiniones o comentarios, no sería vano, puesto que un ordenamiento jurídico de la trascendencia de la Ley de Amparo, debe surgir siempre de un acuerdo base y de un consenso con denominadores comunes de todos aquellos para los que, de un modo u otro, tienen interés en que la institución del amparo utilice fórmulas normativas modernas y acordes con las exigencias actuales.

Por todo ello, estoy convencido de que este esfuerzo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permitirá, finalmente, llegar a un proyecto definitivo de una nueva Ley de Amparo, coadyuvando así a que nuestro principal medio de control constitucional, el juicio de amparo, consolide nuestro Estado de Derecho.

**Ministro Genaro David Góngora Pimentel,
Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y del
Consejo de la Judicatura Federal**

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

17 de noviembre de 1999

A LA COMUNIDAD JURÍDICA MEXICANA

**La Suprema Corte de Justicia de la Nación
invita a los Señores Consejeros de la
Judicatura Federal, Magistrados y Jueces,
Docentes, Investigadores, Académicos,
Miembros de Asociaciones de Abogados,
Colegios, Academias y a la Sociedad Civil en
general, a formular propuestas para la
elaboración de**

UNA NUEVA LEY DE AMPARO

El Estado de Derecho tiene, como principal función, garantizar la justicia y el respeto a la persona humana.

La consolidación de nuestro Estado de Derecho resulta una alta prioridad para sus instituciones republicanas. El Estado de Derecho que habremos de construir para el próximo milenio requiere contar con mejores leyes, a fin de garantizar la plena vigencia de nuestra Constitución, mayor capacidad para aplicar la ley y, sobre todo, una administración de justicia más eficaz.

Hoy más que nunca, la sociedad requiere contar con un sistema de justicia moderno que sea capaz de asegurar una pronta, completa e imparcial administración de justicia.

El Poder Judicial de la Federación, consciente de esta gran responsabilidad, convoca a los señores Magistrados de tribunales colegiados, academias y a la sociedad civil en general, a formular propuestas para la elaboración de una nueva Ley de Amparo.

Dichas propuestas se deberán enviar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con atención al Señor Ministro Humberto Román Palacios, Coordinador de la Comisión organizadora.

A través de este esfuerzo, garantiremos que la norma procesal federal –esto es, la Ley de Amparo–, siga siendo el marco jurídico a través del cual se asegure la eficacia del juicio de amparo, piedra angular para la defensa de nuestra Constitución.

Todas y cada una de las propuestas serán analizadas, a mediados del año próximo, en un Congreso Nacional de Juristas que determinará lo conducente.

Estamos seguros que, con la entusiasta participación de todos, lograremos construir un mejor sistema de justicia, más oportuno y expedito.

ATENTAMENTE

**MINISTRO GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA FEDERAL**

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

26 de noviembre de 1999.

A LA COMUNIDAD JURÍDICA MEXICANA

**A los Señores Consejeros de la Judicatura
Federal, Magistrados y Jueces, Docentes,
Investigadores, Académicos, Miembros de
Asociaciones de Abogados, Colegios,
Academias y Sociedad Civil en general:**

El 17 de noviembre actual, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró formalmente integrada la Comisión de Análisis de Propuestas para una Nueva Ley de Amparo y en esta fecha se iniciaron los trabajos de la misma.

Dicha Comisión se integra de la manera siguiente:

Coordinador General:

Ministro Humberto Román Palacios
Ministro Juan N. Silva Meza
José Ramón Cossío Díaz
César Esquinca Muñoz
Héctor Fix-Zamudio
Javier Quijano Baz
Manuel Ernesto Saloma Vera
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Asimismo, se les informa que las direcciones en las que podrán presentar o enviar los trabajos o propues-

tas, a la atención de quien coordina dicha Comisión, a más tardar el 15 de enero de 2000, son las siguientes:

1. Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pino Suárez número 2, Tercer piso, Puerta 4063, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, Código Postal 06065.
2. Fax (015) 1.30.12.19.
3. Correo electrónico:
nuevaleyamparo@mail.scjn.gob.mx

Finalmente, por acuerdo de la Comisión, sin perjuicio de que formulen sus propuestas en la forma y términos que estimen pertinente, y con el único propósito de facilitar la sistematización de éstas, ruego a ustedes que, de ser posible, señalen lo siguiente:

- a. El título, capítulo o artículo de la Ley de Amparo actual con que se encuentren relacionadas y/o si tratan sobre temas no comprendidos en dicha legislación, precisen el título, capítulo, artículo, párrafo o fracción que se crearía con la propuesta;
- b. Consideraciones o motivos que expliquen sus aportaciones; y
- c. La redacción que resultaría al incorporar sus comentarios.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Si elaboran sus propuestas en computadora y las presentan personalmente o por correo, mucho agradeceremos acompañar el *diskette* que contenga el documento.

ATENTAMENTE

**Ministro Humberto Román Palacios
Coordinador General de la Comisión de
Análisis de Propuestas para una nueva
Ley de Amparo**

**INFORME DEL MINISTRO
HUMBERTO ROMÁN PALACIOS
COORDINADOR GENERAL DE LA
COMISIÓN DE ANÁLISIS PARA UNA
NUEVA LEY DE AMPARO**

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

**SEÑOR MINISTRO GENARO DAVID GÓNGORA
PIMENTEL
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN.**

SEÑORA Y SEÑORES MINISTROS.

El 17 de noviembre de 1999, por conducto de su presidente, Ministro Genaro David Góngora Pimentel, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consciente de la gran responsabilidad que la soberanía popular confía al Poder Judicial de la Federación, invitó a la comunidad jurídica mexicana y a la sociedad civil en general a participar en la formulación de propuestas para la elaboración de una nueva Ley de Amparo, ya que ante el advenimiento del nuevo milenio, se consideró como una necesidad prioritaria la construcción de un Estado de Derecho, que cuente con mejores leyes para garantizar la plena vigencia de nuestra Constitución y una mayor capacidad para aplicar la ley, atendiendo, además, a que actualmente la sociedad requiere de un sistema de justicia moderno que conduzca al aseguramiento de una pronta, completa e imparcial administración de justicia.

Como sabemos, la Ley de Amparo constituye la norma sustantiva y procesal federal que establece y regula el juicio de garantías, el cual representa en nuestro sistema jurídico la piedra angular para la defensa de nuestra Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En congruencia con la gran importancia que reviste para los mexicanos dicha ley, se emitió la convocatoria a que me vengo refiriendo, buscando que a través de la participación de todos se lograra construir un mejor sistema de justicia, más oportuno y expedito, por lo que en la misma se estableció el compromiso de que todas y cada una de las propuestas formuladas serían analizadas para redactar un proyecto de ley, mismo que a mediados del presente año, sería analizado en un Congreso Nacional de Juristas.

En esa ocasión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación me distinguió nombrándome Coordinador General de la Comisión de Análisis de Propuestas para una nueva Ley de Amparo e integró la Comisión, además, por el Ministro Juan N. Silva Meza, Doctor José Ramón Cossío Díaz, Magistrado César Esquinca Muñoa, Doctor Héctor Fix-Zamudio, Licenciado Javier Quijano Baz, Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera y Licenciado Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Por mi conducto, el 26 de noviembre de 1999, la Comisión hizo del conocimiento de la comunidad jurídica mexicana y de la sociedad civil en general, la manera en que la misma había quedado integrada y la fecha en que se iniciaron los trabajos correspondientes. Asimismo, en esa ocasión se informó la dirección a la que podían presentarse o enviarse los trabajos o propuestas, a la atención del Coordinador, que fue la del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

la Nación; se informó también el número de fax y el correo electrónico. A lo anterior se le dio amplia difusión directa y a través de los medios de comunicación, para lograr la participación de los diferentes sectores de nuestra sociedad.

Con el propósito de facilitar la sistematización de las propuestas, se recomendó que éstas se presentaran, preferentemente, señalando el título, capítulo o artículo de la Ley de Amparo actual con que se encontraran relacionadas, y si trataban sobre temas no comprendidos en dicha legislación, se precisara el título, capítulo, artículo, párrafo o fracción que se crearía con la propuesta; las consideraciones o motivos que explicaban las aportaciones; y la redacción que resultaría al incorporar sus comentarios. Si los trabajos se elaboraban en computadora y fueran presentados personalmente o por correo, se sugirió acompañar el *diskette* que contuviera el documento.

El 3 de diciembre de 1999, se iniciaron las sesiones de los integrantes de la Comisión para cumplir con la tarea encomendada, se entregó a todos los miembros los programas de trabajo que fueron diseñados para esa primera reunión, un legajo con las propuestas recibidas hasta ese momento y se hizo la presentación de un programa de cómputo elaborado especialmente para registrar y sistematizar la captura y consulta de las mismas.

La Comisión determinó una serie de acciones a seguir por el tiempo que durara su encomienda, se acordó

la fecha probable en que habrían de finalizar los trabajos, se distribuyó entre los integrantes el estudio correlacionado con la ley vigente, de tres proyectos de Ley de Amparo, el realizado en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una Comisión que presidió el Ministro Arturo Serrano Robles en 1987, el que se preparó hacia el interior de este Tribunal en 1997 y el formulado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, en 1998, además se entregó copia de los trabajos sobre la materia expuestos en las reuniones nacionales de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, efectuadas en octubre y noviembre de 1999, respectivamente.

Se efectuaron algunas sesiones para discutir temas generales y acordar la posible estructura de una nueva Ley de Amparo.

Igualmente, con la finalidad de determinar el plan de trabajo de la Comisión, se designó a los señores Doctor Héctor Fix-Zamudio, Doctor José Ramón Cossío Díaz y Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera, para que presentaran una propuesta que definiera la naturaleza y objetivo de ésta.

El 20 de enero último, se entregaron a los integrantes de la Comisión cuatro libros, que contienen los documentos que llegaron hasta el 17 de dicho mes; el 25 de enero la Comisión convocó a una conferencia de prensa en la que hizo del conocimiento del público en general los avances del trabajo realizado.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

En total se recibieron 217 documentos que resultaron oportunos, por haberse entregado entre el 24 de noviembre del año anterior y el 15 de enero del actual, fecha esta última que fue señalada como límite para tal efecto. Los documentos extemporáneos fueron 29, dando un total de 246.

Con la finalidad de facilitar el trabajo de análisis encomendado a la Comisión, el 3 de febrero del año en curso se hizo entrega a cada uno de los integrantes de la misma, de 5 volúmenes encuadernados que contienen las propuestas correlacionadas con cada artículo de la Ley de Amparo vigente, volúmenes que incluyen las propuestas vinculadas con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación así como planteamientos generales sobre la Ley de Amparo.

El análisis de los documentos recibidos al ser relacionados con la Ley de Amparo vigente, nos hizo llegar a la conclusión de que se recibieron 1430 propuestas, desde 1 para varios artículos, hasta 50 para otro, además se advirtió que únicamente 18 preceptos vigentes no fueron objeto de propuestas de reforma. (Anexos 1 y 2).

Del 3 de marzo al 7 de abril, se realizaron 11 Foros de Análisis de Propuestas para una nueva Ley de Amparo, en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicadas en

diferentes entidades federativas, con la presencia de un integrante de la Comisión. A dichos foros asistieron 955 abogados de los cuales participaron 89 como ponentes habiéndose obtenido un total de 113 propuestas por ese medio. (Anexo 3).

Igualmente, se recibieron propuestas a través del correo electrónico, que fueron debidamente atendidas.

Entre otras de las acciones se nombró una Subcomisión encargada de la redacción de un proyecto de Ley de Amparo, designándose al Señor Ministro Juan N. Silva Meza para que se hiciera cargo de la misma y al Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera como Secretario.

Una vez establecido un plan de trabajo con base en los documentos elaborados por el Señor Magistrado Manuel Saloma Vera y los doctores en derecho Héctor Fix-Zamudio y José Ramón Cossío Díaz, en los que definieron la naturaleza y objetivo de la Comisión, se procedió a considerar el documento de trabajo preparado por el Doctor José Ramón Cossío Díaz y el Licenciado Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, relativo a los principios para la discusión de una nueva Ley de Amparo, el cual fue discutido ampliamente por todos los integrantes de la Comisión, tomando en consideración las propuestas hechas por los diferentes sectores de la sociedad. Los temas más recurrentes fueron la necesidad de establecer los efectos generales en amparo contra leyes, actualizar el con-

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

cepto de autoridad responsable, redefinir el principio de interés jurídico, eliminar el principio de estricto derecho, establecer los mecanismos que hagan más accesible el juicio de amparo y establecer sanciones para inhibir su abuso, limitar la procedencia del juicio de amparo directo, simplificar los medios para exigir el cumplimiento de las sentencias que conceden el amparo, quitar el carácter de parte al Ministerio Público Federal y otorgar la calidad de tercero perjudicado al ofendido en materia penal.

Los principios que resultaron para llevar al cabo la discusión, en términos generales, fueron los siguientes: derogación de la fórmula Otero, ampliación del interés jurídico, privilegiar la procedencia, el amparo y las cuestiones político-electorales, ampliación del concepto de autoridad para los efectos del amparo, suplencia de la deficiencia de la queja, suspensión en materia administrativa, suspensión en materia penal, jurisprudencia, amparo directo, cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, si debía subsistir el libro segundo, sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, sistemas de competencia, si debían unificarse los sistemas de impedimentos de la Ley de Amparo y de la Ley Orgánica y, problemas derivados de la jerarquía de los tratados internacionales.

Los temas planteados en las propuestas se discutieron por los integrantes de la Comisión a lo largo de las sesiones que hasta la fecha se verificaron, ha-

biéndose realizado una ardua pero productiva labor, en virtud de que a la par de la discusión, se fue elaborando, por la Subcomisión, la redacción de los artículos que fueron resultando de los temas debatidos por todos los integrantes. Para lo cual se siguió un orden preestablecido, agotándose a lo largo de estos meses los temas propuestos.

Otra de las tareas que enfrentó la Comisión fue la correspondiente a la estructura de la Ley de Amparo, en virtud de que como consecuencia de las discusiones *relativas a los diferentes temas que se abordaron*, se llegó a la conclusión de que no era factible conservar la estructura que tiene la ley vigente, ya que no podrían incorporarse en la misma todos los cambios surgidos del consenso de sus integrantes, por lo cual se decidió efectuar una estructura distinta. Para ese efecto se aceptó seguir, en principio, el esquema planteado por los doctores Héctor Fix-Zamudio y José Ramón Cossío Díaz, con las modificaciones que se aprobaron, derivadas de la discusión y aprobación de los temas y de los proyectos de ley que se presentaron.

Distribuido que fue el proyecto elaborado por la Subcomisión a cargo del Ministro Juan N. Silva Meza, la Comisión se avocó al análisis, discusión, redacción y aprobación de una segunda versión, que fue también objeto del mismo tratamiento y se acordó que su producto, una tercera versión, fuera materia de revisión a cargo del Doctor José Ramón Cossío Díaz

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

y del Licenciado Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quienes además elaborarían la exposición de motivos.

Estos dos últimos documentos y la propuesta de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron analizados y aprobados por la Comisión y después de ser revisados por el Licenciado Javier Quijano Baz y el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera, en cuanto a cuestiones de sintaxis, ortográficas y de puntuación, quedaron a cargo de la Coordinación para preparar el volumen que debía entregarse al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Todo lo anterior constituye una relación histórica, sucinta del desarrollo que siguieron los trabajos para la elaboración de un proyecto de nueva Ley de Amparo, que ahora se entrega.

Permítaseme enfatizar el acierto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al integrar esta Comisión en forma incluyente, congruente con la gravedad de la tarea que le fue encomendada, por ello se buscó aprovechar las ideas, los conocimientos, las opiniones, la experiencia y las perspectivas, no sólo de miembros del Poder Judicial de la Federación, como son el Ministro Juan N. Silva Meza, los Magistrados Manuel Ernesto Saloma Vera y César Esquinca Muñoa, sino también de connotados académicos, como el Doctor Héctor Fix-Zamudio investigador

emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Doctor José Ramón Cossío Díaz, Director del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y de los destacados abogados postulantes Javier Quijano Baz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Cada uno de los citados integrantes de la Comisión, con absoluta entrega, dedicación y gran responsabilidad, intervino a lo largo de las reuniones de trabajo que se desarrollaron invariablemente en un ambiente de libertad y tolerancia; su participación no sólo fue de excelencia jurídica, también puso de manifiesto su bonhomía que permitió discutir apasionadamente, sostener puntos de vista disidentes y no obstante ello, concluir con la aprobación de lo que se estimó como mejor solución, por tal motivo mi personal reconocimiento y gratitud.

Los integrantes de la Comisión agradecemos al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la distinción al designarnos y expresamos nuestra disposición para colaborar en lo que se estime pertinente en las actividades que se consideren necesarias para lograr la culminación de esta labor encomiable asumida para bien del Poder Judicial de la Federación en particular y en general de la sociedad a la que nos debemos.

México, Distrito Federal, a 29 de agosto de 2000.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

ANEXO 1

**RELACIÓN DEL NÚMERO DE PROPUESTAS
CORRELACIONADAS POR ARTÍCULO DE LA
LEY DE AMPARO VIGENTE**

Nº	ARTÍCULO	Nº PROPUESTAS
1	1	15
2	2	7
3	3	5
4	3 BIS	13
5	4	15
6	5	25
7	6	6
8	7 DEROGADO	0
9	8	0
10	8 BIS DEROGADO	0
11	9	11
12	10	7
13	11	7
14	12	5
15	13	2
16	14	2
17	15	5
18	16	3
19	17	10
20	18	3
21	19	11

N°	ARTÍCULO	N° PROPUESTAS
22	20	3
23	21	11
24	22	13
25	23	23
26	24	5
27	25	3
28	26	3
29	27	13
30	28	19
31	29	9
32	30	9
33	31	6
34	32	3
35	33	2
36	34	6
37	35	6
38	36	1
39	37	11
40	38	3
41	39	4
42	40	1
43	41	1
44	42	7
45	43	0
46	44	0
47	45 DEROGADO	0
48	46	1
49	47	3

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Nº	ARTÍCULO	Nº PROPUESTAS
50	48	1
51	48 BIS	1
52	49	1
53	50	0
54	51	3
55	52	0
56	53	0
57	54	3
58	55	0
59	56	2
60	57	1
61	58	1
62	59	1
63	60	1
64	61	1
65	62	0
66	63	0
67	64	0
68	65	5
69	66	5
70	67	2
71	68	3
72	69	1
73	70	1
74	71	4
75	72	2
76	73	50
77	74	24

N°	ARTÍCULO	N° PROPUESTAS
78	75	1
79	76	27
80	76 BIS	35
81	77	7
82	78	3
83	79	10
84	80	11
85	81	7
86	82	6
87	83	30
88	84	7
89	85	5
90	86	5
91	87	3
92	88	9
93	89	7
94	90	8
95	91	11
96	92	2
97	93	2
98	94	0
99	95	25
100	96	1
101	97	9
102	98	4
103	99	10
104	100	2
105	101	5

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Nº	ARTÍCULO	Nº PROPUESTAS
106	102	2
107	103	10
108	104	5
109	105	25
110	106	3
111	107	0
112	108	8
113	109	3
114	110	2
115	111	2
116	112	1
117	113	5
118	114	33
119	115	5
120	116	22
121	116 BIS DEROGADO	0
122	117	6
123	118	3
124	119	1
125	120	4
126	121	2
127	122	6
128	123	10
129	124	23
130	124 BIS	6
131	125	5
132	126	2
133	127	1

N°	ARTÍCULO	N° PROPUESTAS
134	128	0
135	129	3
136	130	4
137	131	16
138	132	5
139	133	2
140	134	1
141	135	4
142	136	13
143	137	2
144	138	13
145	139	3
146	140	3
147	141	0
148	142	1
149	143	4
150	144	1
151	145	6
152	146	15
153	147	7
154	148	2
155	149	16
156	150	8
157	151	13
158	152	9
159	153	2
160	154	1
161	155	21

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Nº	ARTÍCULO	Nº PROPUESTAS
162	156	5
163	157	8
164	158	31
165	158 BIS DEROGADO	0
166	159	6
167	160	5
168	161	10
169	162 DEROGADO	0
170	163	8
171	164	1
172	165	3
173	166	7
174	167	9
175	168	3
176	169	4
177	170	2
178	171	1
179	172	0
180	173	5
181	174	6
182	175	4
183	176	1
184	177	5
185	178	2
186	179	6
187	180	4
188	181	3
189	182	5

Nº	ARTÍCULO	Nº PROPUESTAS
190	182 BIS DEROGADO	0
191	183	0
192	184	19
193	185	4
194	186	4
195	187	3
196	188	3
197	189	0
198	190	1
199	191	3
200	192	16
201	193	10
202	193 BIS DEROGADO	0
203	194	3
204	194 BIS DEROGADO	0
205	195	2
206	195 BIS DEROGADO	1
207	196	4
208	197	6
209	197-A	5
210	197-B	1
211	198	6
212	199	4
213	200	3
214	201	2
215	202	2
216	203	0
217	204	2

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Nº	ARTÍCULO	Nº PROPUESTAS
218	205	2
219	206	2
220	207	2
221	208	2
222	209	1
223	210	2
224	211	14
225	212	10
226	213	4
227	214	4
228	215	3
229	216	3
230	217	19
231	218	6
232	219	2
233	220	1
234	221	4
235	222	2
236	223	2
237	224	3
238	225	5
239	226	2
240	227	9
241	228	4
242	229	4
243	230	3
244	231	3
245	232	2

N°	ARTÍCULO	N° PROPUESTAS
246	233	4
247	234	5
TOTAL		1430

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

ANEXO 2

**ANÁLISIS NUMÉRICO DE ARTÍCULOS DE LA
LEY DE AMPARO**

- I.** La Ley vigente tiene 234 artículos en numeración progresiva ordinaria.
- II.** Tiene artículos bis, A y B: 3 bis, 8 bis, 48 bis, 76 bis, 116 bis, 124 bis, 158 bis, 182 bis, 193 bis, 194 bis, 195 bis, 197-A y 197-B.
TOTAL: 13
- III.** Tiene artículos derogados: 7, 8 bis, 45, 116 bis, 158 bis, 162, 182 bis, 193 bis, 194 bis y 195 bis.
TOTAL: 10
- IV.** Artículos vigentes: 237
- V.** Documentos recibidos: 217. Extemporáneos: 29.
TOTAL: 246
- VI.** Total de propuestas: 1430.
- VII.** De los artículos vigentes no tienen propuesta de reforma los artículos: 8, 43, 44, 50, 52, 53, 55, 62, 63, 64, 94, 107, 128, 141, 172, 183, 189 y 203.
TOTAL: 18

ANEXO 3

FOROS DE ANÁLISIS REALIZADOS EN LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

Nº	Estados	Fecha Año-2000	Nº de Participantes	Nº de Propuestas	Asistentes	Asistió como Representante de la Comisión
1.	Baja California	3 marzo	9	13	130	Ministro Humberto Román Palacios
2.	Guanajuato	3 marzo	7	13	40	Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera
3.	Tlaxcala	10 marzo	11	19	70	Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera
4.	Querétaro	15 marzo	2	2	60	Magistrado César Esquinca Muñoz
5.	Durango	17 marzo	12	14	145	Dr. Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, en representación del Ministro Juan N. Silva Meza
6.	Oaxaca	17 marzo	9	9	140	Ministro Humberto Román Palacios
7.	Chiapas	24 marzo	5	5	43	Magistrado César Esquinca Muñoz
8.	San Luis Potosí	24 marzo	4	6	35	Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera
9.	Cuernavaca, Morelos	31 marzo	14	14	82	Ministro Humberto Román Palacios
10.	Zacatecas	31 marzo	6	6	100	Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera
11.	Cd. Victoria, Tamaulipas	7 abril	10	12	110	Ministro Humberto Román Palacios
TOTALES			89	113	955	

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

**INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE LEY
DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS
ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE

**"LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS
ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS"**

I. Con motivo de la convocatoria emitida por los señores Ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión para el estudio de una nueva Ley de Amparo recibió una gran cantidad de propuestas procedentes de distintos sectores de las profesiones y actividades jurídicas de todo el país. Debido a la importancia y cantidad de esas propuestas, los integrantes de la Comisión se vieron en la necesidad de, primero, clasificarlas por temas y, segundo, establecer una estrategia para cumplimentar sus instrucciones. Estos dos requerimientos plantearon, a su vez, un problema de gran importancia: ¿los trabajos de la Comisión debían limitarse a introducir una serie de modificaciones al texto vigente en la materia o, por el contrario, debiera tratarse de elaborar el anteproyecto de un nuevo ordenamiento? Esta interrogante fue respondida en el segundo sentido, por lo que los trabajos de la Comisión estuvieron guiados por ese objetivo.

Entre las razones que se consideraron para buscar el establecimiento de un nuevo ordenamiento se encuentran las siguientes: el número y la importancia de las propuestas hacía necesario abrir la posibilidad

de trabajar con un texto integral y no tratar de reducirlas al esquema hasta ahora en vigor; las propuestas recibidas y las discusiones habidas en la Comisión advertían sobre la necesidad de introducir algunos cambios significativos en los supuestos de los procedimientos de amparo, muchos de los cuales eran incompatibles con la estructura legal sometida a revisión; finalmente, se consideró que al ser la Ley de Amparo en vigor el producto de una serie de reformas provenientes de diversas filosofías y momentos históricos, había perdido claridad y conexión entre algunas de sus partes, convirtiéndose por ello en un ordenamiento de difícil manejo.

Convencidos de la necesidad de un nuevo ordenamiento, el siguiente problema radicó en identificar los alcances del mandato conferido a la Comisión. ¿Debía limitar su actuación a la Ley de Amparo o considerar que sus tareas debían alcanzar, por el contrario, al sistema mismo de este juicio? La respuesta a estas interrogantes estuvo dada, por un lado, por las propuestas recibidas y, por el otro, por las características propias de nuestro ordenamiento constitucional, mismo que al ser particularmente puntual en su técnica de regulación, hace indispensable modificar una serie de contenidos de esa jerarquía al reformarse el amparo. Adicionalmente, y debido a que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se prevén una serie de supuestos que trascienden al juicio de amparo, se aceptó modificar esa Ley por razones semejantes a las ya expuestas.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

II. El segundo problema que enfrentó la Comisión tuvo que ver con la estructura que había que darle a la propuesta de ley. Como se sabe, nuestro juicio de amparo tiene como característica fundamental el que mediante el mismo se tramitan y resuelven una serie de cuestiones que en otros órdenes jurídicos se enfrentan mediante procesos variados. Considerando posiciones doctrinales expresadas en nuestro país desde hace tiempo, algunas experiencias de derecho comparado y las propuestas recibidas, la Comisión se planteó la alternativa de continuar con la estructura legal en vigor o dar una regulación propia y separada a cada uno de los procesos que es posible identificar bajo el rubro genérico de juicio de amparo. La solución a la que finalmente se arribó fue mantener la estructura vigente. La razón de esta posición radica en la forma en que históricamente se ha ido constituyendo nuestro juicio, primordialmente en la distinción entre las vías directa e indirecta. Al ser estas dos formas de sustanciación fundamentales para la organización del juicio, las mismas determinan y agotan al amparo. Al momento en que se buscó sobreponer a esas formas otras maneras de tramitación –como el amparo casación o el llamado *habeas corpus*, por ejemplo– aconteció que o bien no restaban contenidos jurídicos para ser tratados de manera específica o que, con motivo de la fragmentación de un proceso en diversos lugares de la propuesta de ley, la comprensión de ésta se dificultaba en extremo.

Frente a estas complejidades, la Comisión optó por mantener en general la estructura tradicional e introducir modificaciones ahí donde por razones de integración o de prelación lógica o cronológica de una materia, fuera recomendable. Bajo estas directrices se distinguió dentro del capítulo de la competencia entre las reglas para establecerla y la forma de resolver los conflictos que con motivo de ella pudieran surgir; las disposiciones relativas a los incidentes fueron colocadas con posterioridad a los supuestos de improcedencia y sobreseimiento, pues los primeros habrán de darse una vez que se esté tramitando el juicio; los preceptos relativos a los recursos fueron divididos por secciones y agrupados a fin de facilitar su identificación y manejo, por ejemplo.

Otra cuestión relativa a la estructura tuvo que ver con el juicio de amparo en materia agraria. Las posibilidades eran dos: mantener esa materia en un libro por separado, o buscar en la parte correspondiente de la propuesta de ley la integración de aquellos preceptos que continuaran siendo funcionales a pesar de las reformas agrarias de 1992. La solución que se propone es en el segundo sentido. Por un lado, una gran cantidad de esos asuntos primeramente se resuelven por los tribunales en la materia y llegan al amparo por la vía directa; por otro, se han previsto disposiciones especiales —plazo de promoción de la demanda, suplencia de queja, etc.— dentro de los procesos indirectos. Esta solución permite, por un lado, hacer congruente al juicio de

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

amparo con las modificaciones a la materia agraria y, por otro, permitir que los grupos más desprotegidos de ese sector sigan contando con una posición ventajosa en los procesos de amparo en que deban participar.

III. En cuanto a las cuestiones de nominación, deben hacerse tres precisiones. En primer término, en lo que hace a la utilizada para separar los grupos de normas que regulan determinadas situaciones normativas. Ante la desaparición de los libros de la ley, la denominación más general es el título, mismo que se conforma por capítulos; éstos, a su vez, se componen por secciones y estas últimas, finalmente, por partes. Como se apuntó en el apartado anterior, estas designaciones se insertaron en el proyecto de ley para delimitar conjuntos normativos que en el ordenamiento en vigor no son adecuadamente distinguidos.

En segundo lugar, en la propuesta que se formula se corrigió la denominación tradicional ahí donde era equivocada, polivalente o ambigua; igualmente, se utilizó un cambio en las expresiones cuando era más adecuado para distinguir una pluralidad de situaciones jurídicas. En cualquiera de los dos casos, se tuvo cuidado en no cambiar las expresiones cuando existiera una tradición bien arraigada en criterios jurisprudenciales y en precedentes, o cuando el uso de las mismas se encontrara tan extendido que los perjuicios del cambio fueran superiores al beneficio.

En tercer lugar, se introdujeron las expresiones tribunales colegiados de circuito de amparo y tribunales colegiados de circuito de apelación, a efecto de distinguir entre, por una parte, los actuales órganos colegiados y, por la otra, los actuales tribunales unitarios. La razón de esta modificación radica en que en un buen número de propuestas se estimó necesario que la composición de los órganos de apelación en los procesos federales se eleve a tres miembros, por lo que se hace necesaria una denominación específica para diferenciarlos de otros órganos de composición colegiada.

IV. Entrando al contenido de la ley, uno de los mayores cambios que se proponen es el relativo al objeto de protección del juicio de amparo. Hasta hoy, como es evidente, el mismo se ha limitado a las denominadas garantías individuales que, básicamente, quedaron establecidas desde la Constitución de 1857 y fueron repetidas, en lo sustancial, en la de 1917. La extensión del juicio de amparo se ha dado, ante todo, por las interpretaciones que se dan a las garantías de legalidad y de seguridad jurídica de los artículos 14 y 16 constitucionales, así como a las reinterpretaciones a ciertos preceptos de la Constitución —tal como aconteció, por ejemplo, con lo relativo a la libertad de asociación establecida en el artículo 9o.—. Sin embargo, en el derecho comparado se ha producido un movimiento completamente diferente al que presenciamos en México. El ámbito de protección de los juicios constitucionales se ha

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

extendido también a lo previsto en materia de derechos humanos por diferentes instrumentos del derecho internacional. Las soluciones han variado en este sentido, pues en algunos casos se ha dado jerarquía constitucional a todos los instrumentos celebrados por un Estado; en otros sólo a algunos de ellos; en otros se han dejado como objeto de protección pero sin darle la jerarquía constitucional o en otros, finalmente, previéndose que el contenido de esos instrumentos debe guiar la interpretación que de los derechos fundamentales hagan los tribunales nacionales.

Frente a la variedad de modelos que se podrían adoptar, y dada la necesidad de constituir al juicio de amparo en un medio más eficiente de control de las actuaciones de las autoridades públicas, la Comisión consideró necesario ampliar el marco de protección de ese proceso ampliando la materia del control. La solución que se propone es en el sentido de que mediante el juicio de amparo se protejan de manera directa, además de las garantías que actualmente prevé nuestra Constitución, los derechos contenidos en los cinco instrumentos internacionales generales que en materia de derechos humanos ha ratificado el Estado mexicano: Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por la importancia y extensión de esos cinco instrumentos, es evidente que el juicio de amparo habrá de transformarse sustancialmente y no sólo en cuanto a su denominación como "juicio de garantías". Las importantes consecuencias que habrán de sobrevenir, sin embargo, no afectan a otras partes de nuestro ordenamiento, como podría ser la relación jerárquica entre la Constitución y los tratados internacionales, puesto que aun cuando estos últimos sean objeto de protección del juicio, su jerarquía seguirá siendo inferior a la propia Constitución. Lo relevante de la propuesta que se formula es que habrá de darse una ampliación explícita de los contenidos a los cuales deberán subordinar sus actuaciones las autoridades públicas, lo que habrá de permitir la consolidación del Estado de Derecho y la progresiva judicialización de las actuaciones públicas.

V. Además del objeto de protección y los efectos de las sentencias, la cuestión más relevante del juicio de amparo tiene que ver con el tipo de interés exigido para solicitarlo. Hasta ahora, en nuestro país se ha seguido la idea de que para tal efecto es necesaria la existencia de un interés jurídico, identificado con el derecho subjetivo. Puede ser que en el pasado esa forma de relación entre la situación de las personas y sus posibilidades de acceso a los procesos fuera correcta, toda vez que se pensaba a la sociedad mexicana como altamente homogénea y debidamente representada por los órganos políticos competentes

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

para la expedición de normas generales. Sin embargo, cuando la forma de representación de la sociedad de nuestros tiempos es la pluralidad política y cuando existe una lucha social para lograr la incorporación al orden jurídico de una serie de demandas sociales, no es posible seguir exigiendo que aquello cuya normativización se está demandando sea el contenido del derecho que se está exigiendo.

La forma de resolver el problema del interés para acudir al juicio tiene que ver, entonces, con la forma en que se vislumbran las posibilidades de acceso a la justicia. En este sentido, la forma extrema de solución radica en la previsión del interés simple, en tanto permite que cualquiera que tenga un reclamo se presente a juicio y logre la instauración de un litigio. Esta modalidad presenta, posiblemente, más inconvenientes que ventajas cuando llega a darse de forma generalizada y respecto de cuestiones tan complejas y delicadas como los juicios constitucionales, por lo cual la Comisión estimó que no era conveniente ni razonable proponerlo en el proyecto de Ley de Amparo.

Frente a la disyuntiva de mantener el sistema en sus términos actuales o abrir nuevas posibilidades de impugnación, la Comisión propone introducir el sistema intermedio que suele denominarse de interés legítimo. Se trata de una institución con un amplio desarrollo en el derecho comparado y con algunos

antecedentes en el nuestro que, justamente, permite constituir como quejoso en el amparo a aquella persona que resulte afectada por un acto en virtud de, o la afectación directa a, un derecho reconocido por el orden jurídico –interés jurídico– o, y aquí está lo relevante, cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico. Por su amplitud, este criterio de legitimación debe ser considerado a la luz de todas las hipótesis que puedan llegar a presentarse en el juicio. Por ello, la Comisión propone acotarlo tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, rompería el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener.

VI. Tema de trascendencia es el relativo a los plazos de promoción del juicio de amparo, en tanto se modifican por completo los supuestos de la ley en vigor. Antes de explicar la racionalidad de cada uno de ellos, conviene señalar que en términos generales se busca ampliarlos, lo cual resulta paradójico con la encomienda dada a esta Comisión y con el sentir general de que es necesario lograr la más pronta tramitación y resolución de los juicios. La ampliación

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

obedece, sin embargo, a razones mucho más complejas e instrumentales que la rápida tramitación por virtud de la disminución de los plazos. Una bien entendida impartición de justicia exige de una amplia colaboración entre el juzgador y las partes, debido a que son éstas las que, inicialmente, les presentan los argumentos y fijan los hechos y puntos de derecho sobre los que aquél habrá de resolver. Desde el momento en que se amplían los plazos de presentación de las demandas, se hace factible que las partes preparen con mayor cuidado sus instancias y con ello pueda lograrse una elevación en la calidad de los litigios. Igualmente, la ampliación de los plazos permite un mejor acceso a la justicia en tanto facilita el planteamiento de las defensas de las partes.

En cuanto a los plazos en lo particular, la regla general consistió en aumentarlo de quince a treinta días y se establecieron como excepciones las siguientes: de cuarenta y cinco días tratándose del amparo contra normas generales autoaplicativas; de noventa cuando se trate de sentencias condenatorias en un proceso penal o de actos de privación de los derechos agrarios, y en cualquier tiempo, cuando se trate de actos que importen peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional y la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales.

Además de la mera ampliación de los plazos –ya antes comentada–, la innovación más relevante tiene que ver con las sentencias condenatorias en materia penal. La razón de su previsión es, ante todo, por el hecho de que en el país han cambiado las circunstancias que hacían necesaria su falta de fijación, sobre todo en lo que hace a la dificultad de obtener defensor o contar con las defensas adecuadas en el juicio de amparo. En adelante, se contará con un plazo de noventa días hábiles para la promoción de amparo, mismo que se estima más que suficiente para permitir una debida defensa pero, también, para lograr una adecuada definición sobre la situación de las partes sometidas a un proceso penal.

VII. Tratándose de las causales de improcedencia se hicieron varias modificaciones de relevancia. Por consideraciones de espacio mencionaremos sólo las más importantes. En primer término, se prevé que el juicio de amparo no procederá en contra de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, salvo los casos en que afecten los derechos de personas ajenas al Poder Judicial de la Federación. Este primer asunto es importante y, como se sabe, ha dado lugar a interpretaciones variadas e importantes de nuestro Máximo Tribunal. Sin embargo, la solución que se propone pretende dar respuesta a varias de las objeciones que se presentan, toda vez que, simultáneamente, da cumplimiento a lo establecido en el artículo 100 constitucional en cuanto al

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del Consejo y garantiza la adecuada defensa de los particulares frente a las decisiones de ese órgano. La Comisión estimó que la manera adecuada de permitir una mayor intervención de la Suprema Corte en las decisiones del Consejo debía ser mediante la ampliación de los supuestos del recurso de revisión administrativa, por lo que la Comisión presenta una propuesta en ese sentido.

Otro de los cambios fundamentales se dio en la fracción IV, en tanto se propone la procedencia del juicio de amparo contra las decisiones tomadas por las legislaturas estatales en materia de suspensión o remoción de servidores públicos, por no estar prevista la improcedencia en la Constitución General de la República. Asimismo, se establece la procedencia del amparo contra las resoluciones de trámite dictadas en los procedimientos de declaratoria de procedencia y de juicio político que de manera grave afecten el derecho de defensa de los quejosos. Las razones de este cambio radican, fundamentalmente, en la necesidad de judicializar la mayor parte de los procesos y decisiones de la autoridad, pues sólo así logrará racionalizar y consolidar un Estado de Derecho.

La Comisión propone también establecer de manera puntual y enfática que para la declaración de improcedencia los juzgadores de amparo deberán aplicar las causales de manera estricta y siempre que estén

probadas plenamente. Estas restricciones son importantes en tanto que, en muchas ocasiones, su aplicación ha conllevado la denegación de justicia en tanto se han interpretado de manera distorsionada o aplicado libérrimamente.

Por lo que ve a las causales de sobreseimiento, el cambio más relevante consistió en eliminar el sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia. En la actualidad, cuando el Poder Judicial de la Federación goza de un presupuesto adecuado, ha consolidado la carrera judicial y puede ejercer eficazmente sus funciones, no parece necesario mantener una solución difícilmente justificable fuera del contexto del rezago. Estas figuras procesales, como tantas veces se apuntó, no hablan mal del justiciable que ha sometido su litigio a los órganos de amparo, sino de estos últimos en cuanto *no resuelven dentro de los plazos que marca la ley*.

VIII. En materia de incidentes los cambios propuestos consisten, en lo fundamental, en establecer una tramitación genérica para dar claridad y evitar inútiles y confusas remisiones a la ley supletoria, así como permitir al órgano jurisdiccional de amparo que determine la forma en que debe ser resuelto. Para ello deberá atender a las características del asunto y definir si lo resuelve de plano, si el mismo requiere de un especial pronunciamiento o si reserva su resolución para el momento de fallar el fondo. Esta solución permite, por una parte, mantener ciertos

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

procedimientos específicos o formas de resolución para aquellos incidentes a los que la ley les confiera un trámite especial pero, por la otra, permitir al juzgador decidir cómo proceder dadas las particulares situaciones que concurran al caso sometido a su resolución.

Se prevén dos incidentes nominados dentro del proceso de amparo, relativos a la nulidad de notificaciones y a la reposición de constancias de autos. El primero de ellos habrá de resolverse en términos del párrafo anterior, mientras que para el segundo, como es evidente, se establece una forma específica de resolución. El resto de los incidentes (excepción hecha de la suspensión), aluden a la ejecución de las sentencias de amparo, siendo éstos los de inconformidad, de exceso o defecto en la ejecución de las resoluciones de amparo y el de incumplimiento de la declaración general de inconstitucionalidad o de interpretación conforme.

IX. Respecto a las sentencias de amparo se introducen también algunas modificaciones que deben ser resaltadas, tales como la distinción entre las sentencias cuyo pronunciamiento aluda a normas generales y aquellas que se refieran a actos. Tratándose de las primeras, por lo que más adelante se verá en materia de declaración general de inconstitucionalidad, se prevé que la sentencia de amparo deberá establecer si la norma debe ser declarada constitucional o inconstitucional o, lo que es más

novedoso y posiblemente más relevante, si es posible postular una interpretación de la norma impugnada que al ser conforme con el propio texto constitucional, salve la objeción que de ella se hubiere hecho. Esta solución es importante puesto que si la acumulación de sentencias declarativas de inconstitucionalidad puede dar lugar a la declaración con efectos generales de la norma impugnada, conviene que la Suprema Corte cuente con las atribuciones necesarias para, simultáneamente, salvar la supremacía constitucional y preservar la integridad del orden jurídico.

Igualmente, y en relación con el amparo directo, se prevé que la declaración de inconstitucionalidad se hará en los considerandos de la sentencia y no en los resolutivos. Con esta solución se deja a salvo la posición de la Suprema Corte como tribunal constitucional de máxima jerarquía y se permite, sin embargo, que los colegiados de amparo hagan consideraciones de constitucionalidad en los casos que así proceda.

Es importante destacar que aun cuando se introduce la declaración con efectos generales, debe mantenerse también la declaración con efectos relativos o "fórmula Otero". La razón de esta dualidad se explica por el hecho de que el sistema que se propone por la Comisión tratándose de sentencias en amparo contra normas generales, si puede decirse así, y requiere de ambas posibilidades. De una parte, en efecto, se continuará manteniendo el sistema de los

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

efectos individuales puesto que la declaración general sólo podrá lograrse una vez que se hayan dictado tres sentencias estableciendo la inconstitucionalidad de una norma general y siempre que concurra una votación calificada. Así, respecto de los tres casos individuales necesarios para posibilitar la declaratoria o en todos aquellos en que esa mayoría calificada no se obtenga, el efecto seguirá siendo relativo. Por el contrario, cuando se logre esa mayoría en ese número de asuntos, el Pleno de la Suprema Corte deberá declarar la inconstitucionalidad de la norma impugnada con efectos plenamente generales, mismos que deberá incluir a aquellas normas o disposiciones cuya validez derive de la que hubiere sido anulada.

X. El título segundo de la propuesta de ley se refiere a los procedimientos de amparo. En ambos casos se introdujeron modificaciones de estructura a la prevista en el ordenamiento vigente toda vez que, primeramente, se establecen los supuestos de procedencia y demanda, posteriormente los de substanciación y, finalmente, los relativos a la suspensión. Las modificaciones fundamentales aluden a la suspensión y consistieron en lo siguiente: se establece un sistema equilibrado que permita que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora, pero que cuente con mecanismos que eviten y corrijan los abusos que desvía su objetivo natural.

Para tal efecto, se privilegia la discrecionalidad de los Jueces y se establecen elementos mínimos formales y sustantivos que deben cumplir las resoluciones suspensionales, lo que facilita su control a través de los recursos que se prevén en el proyecto. Asimismo, se faculta al órgano jurisdiccional para solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere convenientes para resolver sobre la suspensión definitiva.

Por otro lado, se consagra expresamente como elemento a considerar para el otorgamiento de la suspensión la apariencia de buen derecho, requisito éste reconocido por la Suprema Corte de Justicia y que constituye uno de los avances más importantes en la evolución del juicio de amparo en las últimas décadas. Sin embargo, para asegurar su correcta aplicación, se establece la obligación del Juez de realizar un análisis ponderado entre la no afectación del interés social y el orden público y la apariencia de buen derecho. Con esto se logra que la medida cautelar sea eficaz y que no se concedan suspensiones que molestan la sensibilidad de la sociedad.

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que se *consideró necesario o conveniente se precisaron los efectos de la medida suspensiva* para evitar confusiones. Esto es lo que ocurre en la materia penal, en la cual se establecen los distintos efectos de la suspensión dependiendo de la etapa procedimental. Debe destacarse que se buscó un sistema que, sin

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

menoscabo de la eficaz persecución de los delitos, permitiera que el amparo cumpliera con su teleología protectora y tuviera plena vigencia el principio de presunción de inocencia. Por ello se prevé que la suspensión definitiva pueda concederse excepcionalmente y de acuerdo a las circunstancias del caso, aun tratándose de delitos que la ley señala como graves.

XI. En materia de amparo directo, además de las modificaciones indicadas en el numeral IX, se introdujeron algunas de relevancia en las cuestiones relacionadas con los supuestos de procedencia y de substanciación. En cuanto a los primeros, se eliminaron las hipótesis relativas a la citación en forma distinta a la prevista en la ley y a la falsa representación en los juicios, pues se consideró que en el primer caso la situación era remediable mediante la figura del tercero extraño, mientras que el segundo daba lugar a una serie de situaciones irregulares.

Asimismo, y tomando en cuenta diversas propuestas en torno a la necesidad de darle mayor concentración a los procesos de amparo directo a fin de evitar dilaciones y situaciones absurdas, así como para abatir la censurada práctica del "amparo para efectos", los integrantes de la Comisión estimaron necesario adoptar tres medidas. Primera, establecer la figura del amparo adhesivo. Segunda, imponer al quejoso o a quien promueva el amparo adhesivo la carga de invocar en el escrito inicial todas aquellas

violaciones procesales que, cometidas en el procedimiento de origen, estimen que puedan violar sus derechos. Con esta solución habrá de lograrse que en un solo juicio queden resueltas las violaciones procesales que puedan aducirse respecto de la totalidad de un proceso y no, como hasta ahora, a través de diversos amparos. La tercera medida consiste en la imposición a los tribunales colegiados de amparo de la obligación de fijar de modo preciso los efectos de sus sentencias, de modo que las autoridades responsables puedan cumplir con ellas sin dilación alguna.

XII. Uno de los temas más complejos del juicio de amparo es el relativo a la ejecución de las sentencias. La importancia del tema radica, como es evidente, en el hecho de que de no lograrse la realización material y rápida de las sentencias, el juicio mismo no tendría ningún sentido. A pesar de su importancia, la materia de ejecución ha tenido un desarrollo ciertamente confuso y complicado, lo que ha propiciado situaciones de indefensión o, lo que es más grave, de impunidad. Para remediar estas deficiencias, los integrantes de la Comisión hemos buscado establecer una nueva estructura a fin de, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o han ido creándose por la jurisprudencia.

Una de las reformas más importantes que proponemos tiene que ver con la forma de sancionar a

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

aquellos servidores públicos que hubieren incumplido con las sentencias de amparo. A la fecha, y no sin algunas opiniones encontradas, se ha estimado que la interpretación correcta de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa a efecto de que este órgano individualice la pena que le corresponde. La solución que se propone ahora es en el sentido de que, y salvando todos los requerimientos del derecho de audiencia, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización.

Otros cambios importantes consisten, como ya se apuntó, en la debida separación de cada una de las posibilidades que puedan presentarse en la etapa de ejecución, así como en la correspondiente previsión de sus diversos supuestos. En este sentido, se identificaron y regularon los siguientes casos: el cumplimiento y ejecución, hipótesis en la cual la autoridad responsable cumple voluntariamente con la sentencia o el Juez de amparo lleva a cabo el procedimiento tendiente a su cumplimiento; la repetición del acto reclamado; el incidente de inconformidad, en el cual se establecen claramente los supuestos de su procedencia y su tramitación; el cumplimiento sustituto; el incidente por exceso o defecto en la ejecución de las sentencias de amparo, que deja de ser recurso para tomar la naturaleza procesal que le corresponde, y el incidente por incumplimiento de la

declaración general de inconstitucionalidad o de interpretación conforme.

XIII. En lo tocante a la jurisprudencia debe decirse que una vez analizadas las diversas propuestas remitidas, la Comisión encontró que la mayor parte de ellas eran en el sentido de mantener una estructura y supuestos generales semejantes a los que prevé la Ley de Amparo. De modo más particular, se analizó la conveniencia de introducir lo que podríamos llamar una "obligatoriedad fuerte" –en el sentido de hacer de la falta de acatamiento un supuesto de sanción–, si bien a final de cuentas se prefirió una "obligatoriedad débil" –entendida ésta como requisito de validez–. La solución adoptada fue el resultado de ponderar la necesidad de que los tribunales acaten los criterios establecidos por ciertos órganos y la dificultad que, en muchas ocasiones, implica el conocimiento del sentido de la jurisprudencia. Por ello, y sin hacer de la obligatoriedad un supuesto de responsabilidad individual para los juzgadores, sí se garantiza la adecuada jerarquización que nuestro orden jurídico prevé a partir de los criterios de ciertos órganos.

Otro tema relevante es el relativo a la generalidad e imprecisión de la jurisprudencia. Debido a que la forma de construcción de las tesis es, si puede decirse así, un extracto de los considerandos de una sentencia y esta última no se publica de manera íntegra ni en ella se alude a los hechos o elementos

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

del caso, la Comisión estimó necesario introducir algunos cambios. Proponemos que la tesis contenga una relación sucinta de los hechos del asunto del cual se deriva y la identificación de la norma respecto de la cual haya de fijarse el criterio. Con estas dos adiciones habrá de lograrse, primero, que los órganos competentes precisen las condiciones de interpretación y de aplicabilidad de los criterios que vayan estableciendo y, segundo, que los particulares o autoridades que actúan como partes encuentren formas más adecuadas para definir y formular sus defensas. La precisión de los criterios habrá de producir, entonces, una mayor certeza en la impartición de justicia.

Otra modificación significativa consiste en la reducción de cinco a tres del número de tesis necesarias para constituir jurisprudencia. El cambio de número no es caprichoso ni se reduce a una mera cuestión de restas. En realidad, de lo que se trata es de encontrar un adecuado equilibrio entre el sistema de precedentes que se sigue en otros ordenamientos o en los procesos de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad y el de reiteración de criterios que se prevé para la Ley de Amparo. Lo importante es, precisamente, lograr una solución intermedia entre ambos extremos. Esto puede lograrse disminuyendo el número de los casos a tres a efecto de que los órganos competentes puedan, con mayor facilidad, lograr que sus criterios sean obligatorios a efecto de darle certeza a nuestro orden jurí-

dico. Sin embargo, para que la reiteración cumpla con su finalidad, se establece que los criterios deban ser fijados al resolver los asuntos en tres sesiones distintas.

Debe también resaltarse que en la hipótesis de la jurisprudencia por contradicción de tesis se propone que ésta pueda ser revisada a solicitud de cualquiera de los Ministros de la Suprema Corte, con la finalidad de que desaparezcan las llamadas "jurisprudencias congeladas" que trastocan las ventajas de la aplicación jurisdiccional del derecho y que podrían provocar consecuencias indeseadas.

XIV. La declaración general de inconstitucionalidad y de interpretación conforme con la Constitución constituyen un tema de indudable importancia y relieve, como puede apreciarse de las diversas propuestas que se hicieron para regular su establecimiento en la nueva Ley de Amparo. Sobre la primera de esas posibilidades cabe señalar que la declaratoria corresponde en exclusiva al Pleno de la Suprema Corte, siempre que la misma hubiere establecido jurisprudencia por reiteración en los términos acabados de apuntar. Es decir, si bien es cierto que a nuestro Máximo Tribunal se le confiere tan importante atribución, también lo es que sólo se actualiza ante el establecimiento reiterado de un criterio jurisprudencial. La declaración de interpretación conforme, por su parte, tiene la ventaja de permitir a la Corte establecer aquella interpretación

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

mediante la cual sea factible salvar la constitucionalidad de la norma impugnada para, de esa forma, garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación de nuestro orden jurídico.

Debido a la trascendencia de las declaratorias acabadas de mencionar, se estima necesario que se hagan de manera separada a las sentencias judiciales. En ese proceso específico, y a efecto de estar en posibilidad de construir el sentido y alcances de la declaratoria general con gran cuidado, se confiere a la Suprema Corte la facultad de llamar a quien estime conveniente a efecto de escuchar sus opiniones antes de tomar una medida de tal trascendencia para nuestro orden jurídico. Finalmente, y debido a los alcances de la resolución, se establece que la misma deba ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el *Semanario Judicial de la Federación* y en el órgano oficial de la entidad que, en su caso, hubiere emitido la norma sobre la cual se hubiere hecho tal declaratoria.

XV. Ya que las sanciones no se encuentran debidamente sistematizadas y agrupadas en la ley vigente, se planteó la posibilidad de satisfacer ambos extremos en un mismo título. Al efecto se estableció, primeramente, que la totalidad de las multas se computarían en días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Por otro lado, los supuestos que

pueden traer consigo la aplicación de multas se ordenan y exponen en razón del orden de los artículos que prevén las hipótesis a sancionar. Tratándose de estas últimas, conviene mencionar que se introdujeron dos tipos penales especiales al haber sido considerados de extrema gravedad: el caso en que las responsables rindan informes falsos en el juicio o en el incidente de suspensión, y la revocación del acto reclamado a efecto de lograr el sobreseimiento para posteriormente insistir en su propio acto.

**PROYECTO DE LEY DE AMPARO
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS
103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS**

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

**LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS
ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS**

**TÍTULO PRIMERO
Reglas Generales**

**Capítulo I
Disposiciones Fundamentales**

Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales o actos de autoridad que violen las garantías que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos humanos que protegen los tratados internacionales generales en la materia, a saber: la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho.

Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley.

Las copias certificadas que se expidan para la subsanciación del juicio de amparo, no causarán contribución alguna.

Capítulo II

Capacidad y Personería

Artículo 4o. Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, titular de un derecho o de un interés legítimo, siempre que el acto reclamado viole las garantías o los derechos previstos en el artículo primero y con ello se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su propia situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta, trata de ejecutar u omite el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria;

III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter:

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista;

b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso;

c) El ofendido o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte esa reparación o responsabilidad;

d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el desistimiento o el no ejercicio de la acción penal; y

e) El ministerio público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable; y

IV. El ministerio público federal, en los juicios de amparo contra normas generales.

Artículo 5o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien agravie la norma general o el acto reclamados. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado.

Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la ley lo permita.

Artículo 6o. El menor de edad podrá pedir amparo sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional de amparo, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio.

Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda.

Artículo 7o. La federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública con carácter de autoridad, podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que designen las disposiciones que los rijan, cuando la norma general o el acto que reclamen afecte intereses distintos de los que correspondan a sus funciones de autoridad.

Artículo 8o. Las autoridades responsables no podrán ser representadas en el juicio de amparo. Podrán por medio de simple oficio acreditar delegados que concurren a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen y hagan promociones.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

El Presidente de la República podrá comparecer a juicio en los términos que determine por conducto del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, por éste, por el Procurador General de la República, los secretarios de estado y jefes de departamento administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, en términos de las leyes orgánicas y reglamentos aplicables.

En los juicios de amparo promovidos en contra de actos de los titulares de las dependencias de la administración pública federal, aquéllos podrán ser suplidos por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución.

Artículo 9o. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta ley y en las demás aplicables.

Cuando el ministerio público actúe como tercero interesado se le aplicarán las reglas del artículo anterior.

Artículo 10. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme, bajo protesta de decir verdad, tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite a más tardar en la audiencia constitucional.

En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda indicará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta.

Artículo 11. El quejoso y el tercero interesado podrán nombrar apoderado para que los represente en el juicio, por escrito ratificado ante el órgano jurisdiccional que conozca del mismo, o mediante poder general o especial. Se requerirá cláusula especial para que el apoderado desista del juicio o de los recursos.

Artículo 12. Cuando la demanda se promueva por dos o más quejosos, deberán designar de entre ellos un representante común. En su defecto, lo hará el órgano jurisdiccional.

Artículo 13. Para la admisión de la demanda en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter, lo que deberá acreditar dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo de admisión. Si no lo acredita, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo lo hará del conocimiento del señalado como quejoso para que en el momento de la diligencia manifieste si ratifica la demanda, entendiéndose las diligencias directamente con él mientras no señale representante. Si no la ratifica se sobreseerá en el juicio.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Artículo 14. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro, extradición o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En este caso, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo abrirá un cuaderno de antecedentes en el que dictará las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física del quejoso y lograr su comparecencia, en la que será requerido para que manifieste si ratifica la demanda de amparo; si lo hace se tramitará el juicio y en caso contrario se tendrá por no presentada la demanda.

Si a pesar de las medidas tomadas no se hubiere podido lograr la comparecencia del quejoso, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio pondrá los hechos en conocimiento del ministerio público federal.

Transcurridos tres meses sin que nadie se apersone en el juicio en representación legal del quejoso, se tendrá por no presentada la demanda.

Artículo 15. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en

el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión.

Si el fallecido no tiene representación en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que se decretó la suspensión, se ordenará al ministerio público federal que la localice o haga la denuncia correspondiente.

Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para ese efecto.

Capítulo III

Plazos

Artículo 16. El plazo para presentar la demanda de amparo es de treinta días, salvo:

- I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, en que será de cuarenta y cinco días;
- II. Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal, en que será de noventa días;

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal, en que será de noventa días; y

IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro, o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.

Artículo 17. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.

Artículo 18. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, primero de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, primero y cinco de mayo, catorce y

dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Consejo de la Judicatura Federal se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor.

Artículo 19. El juicio puede promoverse en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido.

Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados ni para el gobierno, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, aun fuera de las horas del despacho y aun cuando existan disposiciones en contrario de las autoridades administrativas.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Artículo 20. La presentación de demandas o promociones de término podrá hacerse, el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales ante la oficialía de partes común que habrá de funcionar hasta las doce de la noche.

Con independencia de lo anterior, los órganos jurisdiccionales de amparo podrán habilitar días y horas cuando lo estimen pertinente para el adecuado despacho de los asuntos.

Artículo 21. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento.

Para la interposición de los recursos, correrán para cada parte desde el día siguiente a aquel en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva.

Los plazos podrán ampliarse por razón de la distancia, teniendo en cuenta la facilidad o dificultad de las comunicaciones. En ningún caso podrá exceder de un día por cada cuarenta kilómetros.

Artículo 22. Si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina de

correos que corresponda al lugar de su residencia, o en la más cercana en caso de no haberla.

Capítulo IV **Notificaciones**

Artículo 23. Las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente. La razón que corresponda se asentará inmediatamente después de dicha resolución.

El agraviado y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, desistir de las mismas, alegar en las audiencias y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, y se proporcionarán los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización.

Las partes también podrán autorizar sólo para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Artículo 24. La primera notificación al titular del Poder Ejecutivo se entenderá con el Consejero Jurídico. Las subsecuentes notificaciones se harán directamente a los servidores públicos designados en términos del artículo 8o.

Artículo 25. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán:

I. En forma personal:

- a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión, salvo que tenga defensor o persona designada para oír notificaciones;
- b) El emplazamiento al tercero interesado;
- c) Los requerimientos y prevenciones;
- d) Las sentencias que no sean pronunciadas en la fecha de celebración de la audiencia constitucional;
- e) El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional; y
- f) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional de amparo lo ameriten;

II. Por oficio:

- a) A la autoridad responsable;
- b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y
- c) Al ministerio público federal en el caso de amparo contra normas generales; y

III. Por lista, en los casos no previstos en las fracciones anteriores.

Artículo 26. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas:

I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio:

- a) El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha;
- b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

correcto y le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, en el que indicará el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista; y

c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y dará cuenta al órgano jurisdiccional de amparo, quien tomará las medidas necesarias para lograr la notificación personal y, en caso de no ser posible, ordenará que se haga por lista.

En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el actuario asentará razón circunstanciada en el expediente;

II. Cuando el domicilio señalado de la persona a notificar no se encuentre en el mismo lugar en que resida el órgano jurisdiccional de amparo, la primera notificación se hará por exhorto o despacho en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En el exhorto o despacho se requerirá que se señale domicilio en el lugar del juicio, con apercibimiento que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se practicarán por lista.

Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que co-

noche del juicio, pero en zona conurbada, podrá comisionar al notificador para que la realice en los términos de la fracción I de este artículo;

III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto:

a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista;

b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado, el órgano jurisdiccional de amparo dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles; y

IV. Cuando deba notificarse al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, si no consta en autos el domicilio para oír notificaciones, ni se expresan estos datos en el escrito, la petición será reservada hasta que el interesado llene la omisión, notificándose el trámite por lista.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Artículo 27. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes:

I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, el actuario practicará en aquél la diligencia y asentará la razón en autos.

Si la autoridad se niega a recibirla, se asentará en autos la razón correspondiente y se tendrá por hecha la notificación;

II. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar del juicio, se enviará el oficio por correo en pieza certificada con acuse de recibo, el que se agregará en autos; y

III. En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la eficacia de la notificación, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo o del incidente de suspensión o de cualquier otro previsto por esta ley, podrá ordenar que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio, sin perjuicio de practicarla conforme a las fracciones I y II.

Las oficinas públicas de comunicaciones están obligadas a transmitir, sin costo alguno, los oficios a que se refieren las anteriores fracciones.

Artículo 28. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará en lugar visible y de fácil acceso a

primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y contendrá:

- I. El número del juicio;
- II. El nombre del quejoso;
- III. La autoridad responsable; y
- IV. La síntesis de la resolución que se notifica.

El actuario asentará en el expediente la razón respectiva.

Artículo 29. Las notificaciones surtirán sus efectos:

- I. Las que se hagan a las autoridades responsables, desde la hora en que hayan quedado legalmente hechas.

Cuando el oficio de notificación se envíe por correo, el día que conste en el acuse de recibo; y

- II. Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación de la lista en los órganos jurisdiccionales de amparo.

Artículo 30. Serán nulas las notificaciones que no se hicieren en la forma que establecen las disposiciones precedentes.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Capítulo V
Competencia

Sección Primera
Reglas de Competencia

Artículo 31. Son competentes para conocer del juicio de amparo:

I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas;

II. Los tribunales colegiados de circuito de amparo;

III. Los tribunales colegiados de circuito de apelación;

IV. Los juzgados de distrito; y

V. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal, en los casos previstos por esta ley.

Artículo 32. Los tribunales colegiados de circuito de amparo son competentes para conocer del juicio de amparo directo.

Su competencia se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, de acuerdo con la especialización por materia.

Artículo 33. Los juzgados de distrito o los tribunales colegiados de circuito de apelación son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto.

También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo.

Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito de apelación sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de la misma naturaleza; siempre que las resoluciones no constituyan sentencia definitiva o pongan fin al juicio. En estos casos, será competente el tribunal del mismo circuito si lo hubiere o el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto reclamado.

Artículo 35. Es juez competente el del distrito donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez que primero admita la demanda; en su defecto, aquel que dicte acuerdo sobre la misma o, en su caso, aquel que primeramente la hubiere recibido.

Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad responsable.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Artículo 36. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiere, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca.

Artículo 37. Cuando se trate de amparos contra actos de autoridades que actúen en auxilio de la justicia federal, no podrá conocer el juez de distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado. En estos casos, conocerá otro del mismo distrito y especialización, en su caso, y si no lo hubiere, el más cercano dentro de la jurisdicción a que pertenezca.

Artículo 38. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de un amparo directo o en revisión, que corresponda resolver a los tribunales colegiados de circuito de amparo, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I. Planteado el caso por cualquiera de los ministros, el pleno acordará si procede solicitar los autos al tribunal colegiado de circuito de amparo, en cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, éste los remitirá dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción de la solicitud;

II. Recibidos los autos se turnará el asunto al ministro que corresponda, para que dentro del plazo de quince días formule dictamen a efecto de resolver si se ejerce o no dicha facultad; y

III. Transcurrido el plazo anterior el dictamen será discutido por el tribunal pleno dentro de los tres días siguientes.

Si el pleno decide ejercer la facultad de atracción se avocará al conocimiento, en caso contrario, devolverá los autos al tribunal de origen.

Sección Segunda Conflictos Competenciales

Artículo 39. *Ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a su superior.*

Artículo 40. *Luego que se suscite una cuestión de competencia, se suspenderá todo procedimiento con excepción del incidente de suspensión.*

Artículo 41. *Cuando alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga conocimiento de que la otra está conociendo de cualquier asunto de que aquélla deba conocer, le requerirá para que cese en el conocimiento y le remita los autos. Dentro del término de tres días, la sala requerida dictará resolución y si estima que no es competente, remitirá los autos a la requirente. Si considera que*

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

es competente, hará saber su resolución a la requirente, suspenderá el procedimiento y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el tribunal pleno resuelva lo que proceda.

Cuando se turne a una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un asunto en materia de amparo y ésta estime que no es competente para conocer de él, lo declarará así y remitirá los autos a la otra. Si esta última considera que tiene competencia, se avocará al conocimiento del asunto; en caso contrario, comunicará su resolución a la sala que se haya declarado incompetente y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el tribunal pleno resuelva lo procedente.

Artículo 42. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tramitarse como directo, declarará insubsistente la sentencia recurrida y remitirá los autos al correspondiente tribunal colegiado de circuito de amparo.

Si el que conoce de la revisión es un tribunal colegiado de circuito de amparo, declarará insubsistente la sentencia recurrida y se avocará a su conocimiento en la vía directa.

Artículo 43. Cuando se reciba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de amparo la remitirá con sus anexos al órgano jurisdiccional de amparo que corresponda. El designado conocerá del juicio sin que pueda objetarse su competencia, salvo el caso de vía, territorio o especialidad.

Cuando se reciba en un tribunal colegiado de circuito de amparo una demanda que deba tramitarse en vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente.

Artículo 44. Cuando un tribunal colegiado de circuito de amparo tenga conocimiento de que otro conoce de un asunto que a aquél le corresponda, le requerirá para que le remita los autos. Si el requerido estima no ser competente, dentro de los tres días siguientes a la recepción del requerimiento remitirá los autos. Si considera que lo es, en igual término hará saber su resolución al requirente, suspenderá el procedimiento y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien *lo turnará a la sala que corresponda, para que dentro del término de ocho días resuelva lo que proceda.*

Cuando un tribunal colegiado de circuito de amparo que conozca de un juicio o recurso, estime carecer de competencia para conocer de ellos, lo declarará así y enviará los autos al órgano jurisdiccional que en su concepto lo sea.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Si éste acepta la competencia, se avocará a su conocimiento; en caso contrario, comunicará su resolución al órgano que declinó la competencia y remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que decida lo que corresponda.

Artículo 45. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o tribunal colegiado de circuito de apelación, en la que se reclamen actos que no sean materia de su competencia por estimar que son impugnables en amparo directo, declarará carecer de ella y de inmediato remitirá la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito de amparo que corresponda.

El presidente de éste decidirá, sin trámite alguno, si confirma o revoca la resolución del juez de distrito o tribunal colegiado de circuito de apelación. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso y a la autoridad responsable un plazo que no podrá exceder de cinco días para la presentación de las copias y del informe correspondiente; en el caso que decida revocar la resolución, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieren suscitarse entre jueces de distrito o tribunales colegiados de circuito de apelación.

Si la competencia del tribunal colegiado de circuito de amparo apareciere del informe previo o justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tri-

bunal colegiado de circuito de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo y comunicará tal circunstancia a la autoridad responsable para que provea lo relativo a la suspensión del acto reclamado.

Artículo 46. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o tribunal colegiado de circuito de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal que estimen competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de aquellos actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si aceptare, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdic-

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

ción de un mismo tribunal colegiado de circuito de amparo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de amparo de su jurisdicción quien dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente.

Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito de amparo, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el párrafo anterior.

Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito de amparo tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio, comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al declarado competente.

Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.

Artículo 47. Cuando el juez de distrito o tribunal colegiado de circuito de apelación ante el cual se haya promovido un juicio de amparo, tenga conocimiento de que otro está conociendo de un juicio diverso promovido por el mismo quejoso, contra las mismas

autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, lo comunicará de inmediato mediante oficio a dicho órgano, anexando la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como, en su caso, del auto dictado como primera actuación en el juicio.

Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes si se trata del mismo asunto y si le corresponde su conocimiento, comunicando lo anterior al oficiante. Si reconoce la competencia de éste, le remitirá los autos relativos.

En caso de conflicto competencial, se estará a lo dispuesto en esta sección.

Cuando se resolviere que se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio promovido ante el juez que hubiere resultado competente, debiéndose sobreseer en el otro juicio.

Artículo 48. Cuando alguna de las partes estime que un juez de distrito o tribunal colegiado de circuito de apelación, está conociendo de un juicio de amparo que debe tramitarse como directo, podrá ocurrir ante el tribunal colegiado de amparo que estime competente exhibiendo copia de la demanda y de las constancias conducentes.

El presidente pedirá informe al juez o tribunal colegiado de circuito de apelación, que deberá rendir-

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

se en el plazo de veinticuatro horas y resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

Capítulo VI **Impedimentos, Excusas y Recusaciones**

Artículo 49. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán declararse impedidos, en los siguientes casos:

- I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo;
- II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior;
- III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo;
- IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada;

V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada;

VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; y

VII. Si tuvieran amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes.

Artículo 50. En materia de amparo sólo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que enumera el artículo anterior.

Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de tales impedimentos.

Artículo 51. El funcionario judicial que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión, excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto. En este supuesto, el servidor público que deba sustituirlo resolverá lo que corresponda, en tanto se califica la causa de impedimento.

Artículo 52. Conocerán de las excusas y recusaciones:

I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los asuntos de su competencia;

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

II. La sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los asuntos de su competencia, así como en el supuesto del artículo 54;

III. Los tribunales colegiados de circuito de amparo:

a) De uno de sus magistrados;

b) De dos o más de los magistrados de otro tribunal colegiado; y

c) De los jueces de distrito y demás autoridades que conozcan de los juicios de amparo, que se encuentren en su circuito; y

IV. Los tribunales colegiados de circuito de apelación, cuando se trate de uno de sus integrantes.

Artículo 53. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o ante la sala que conozca del asunto de que se trate.

Los magistrados de los tribunales de circuito y los jueces de distrito manifestarán su impedimento y lo comunicarán al tribunal colegiado que corresponda.

Las excusas se calificarán de plano.

Artículo 54. Cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del

pleno o sala, los restantes calificarán el impedimento. Si lo admitieren, el órgano jurisdiccional de amparo continuará el conocimiento del asunto con los restantes; en caso de empate el presidente que corresponda tendrá voto de calidad.

Cuando se manifiesten impedidos dos o más ministros de una de las salas, se calificará el impedimento *por la otra*. Si se admitieren, *se pedirá a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia la designación de los ministros de la otra sala que se requieran para que la primera pueda funcionar válidamente.*

Artículo 55. Cuando uno de los integrantes de un tribunal colegiado de circuito se manifieste impedido, los dos restantes calificarán el impedimento.

En caso de empate o cuando los impedimentos se hayan hecho valer por más de un magistrado, la calificación corresponderá al tribunal colegiado de amparo siguiente en orden del mismo circuito y especialidad, en su caso, y de no haberlo al del circuito más cercano. En estos supuestos, si se trata de magistrados de un tribunal colegiado de apelación calificará el impedimento el tribunal colegiado de circuito de amparo de la jurisdicción y, en su caso, de la especialidad por materia. Si se admite el impedimento de un magistrado, se solicitará al tribunal colegiado de circuito de amparo de su jurisdicción y, en su caso, materia, siguiente en número o, en su defecto, al más cercano para que nombre un magistrado que con los restantes continúe en el conocimiento del asunto.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Si resulta fundada la excusa o la recusación de más de un magistrado, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de su jurisdicción y, en su caso, materia o, en su defecto, al más cercano, para que se avoque al conocimiento del asunto.

Artículo 56. Cuando se declare impedido a un juez de distrito, el conocimiento del asunto corresponderá a otro del mismo distrito y, en su caso, especialización; en su defecto, conocerá el más próximo perteneciente a otro circuito.

Artículo 57. En el escrito de recusación deberán manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que fundamentan el impedimento y exhibirse en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada. De no cumplirse estos requisitos la recusación se desechará de plano, salvo que, por lo que hace al último de ellos, se alegue insolvencia. En este caso, el órgano jurisdiccional la calificará y podrá exigir garantía por el importe del mínimo de la multa o exentar de su exhibición.

Artículo 58. La recusación se presentará ante el funcionario a quien se estime impedido, el cual lo comunicará al órgano que deba calificarla. Éste, en su caso, la admitirá y solicitará informe al servidor público requerido, el que deberá rendirlo dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación.

Si el servidor público admite la causa de recusación, se declarará fundada; si la negare, se señalará día y hora para que dentro de los tres días siguientes se celebre la audiencia en la que se ofrecerán, admitirán y desahogarán las pruebas que ofrezcan las partes y se dictará resolución.

En caso de no rendirse el informe a que se refiere el párrafo primero, se declarará fundada la causa de recusación.

Si la recusación se declara fundada, se devolverá al promovente la garantía exhibida.

Capítulo VII

Improcedencia

Artículo 59. El juicio de amparo es improcedente:

I. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

II. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, salvo los que afecten derechos de personas ajenas al Poder Judicial de la Federación;

III. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

IV. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso de la Unión o de sus Cámaras en materia de

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

declaratoria de procedencia o de juicio político a que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, será procedente en contra de resoluciones y acuerdos dictados en la secuela del procedimiento, siempre que se afecten gravemente las defensas del quejoso;

V. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;

VI. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos;

VII. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;

VIII. Contra actos que no causen agravio al quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación para causarlo;

IX. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;

X. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.

No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnabile en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquel al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;

XI. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral;

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

XII. Contra actos consumados de modo irreparable;

XIII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica;

XIV. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

Se exceptúa de lo anterior:

a) Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales;

b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de formal prisión o de sujeción a proceso, resolución que

establezca los requisitos para el otorgamiento de la libertad bajo caución, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y

c) Cuando se trate de terceros extraños al procedimiento;

XV. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;

XVI. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fun-

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

damentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución;

XVII. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;

XVIII. Cuando subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y

XIX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley.

Artículo 60. Las causas de improcedencia son de aplicación estricta, deberán quedar probadas plenamente y se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.

Capítulo VIII Sobreseimiento

Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede:

I. Cuando el quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca esta consecuencia;

II. Cuando el quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona;

III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y

IV. Cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.

Artículo 62. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo.

Artículo 63. El sobreseimiento no prejuzga sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenar o ejecutar el acto reclamado.

Capítulo IX Incidentes

Artículo 64. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental las cuestiones a que se refiere expresamente esta ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia.

Artículo 65. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas en que se

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

fundé. Se dará vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Atendiendo a la naturaleza del caso, el órgano jurisdiccional determinará si se suspende o no el procedimiento.

Transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, en su caso, se dictará la resolución correspondiente.

Sección Primera **Nulidad de Notificaciones**

Artículo 66. Antes de la sentencia definitiva las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que haya motivado aquella cuya nulidad se pide, en la siguiente actuación en que comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, podrán pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a aquella, en la siguiente actuación que comparezcan.

Este incidente se tramitará en términos del artículo anterior y no suspenderá el procedimiento.

Las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharán de plano.

Artículo 67. Declarada la nulidad, se repondrá el procedimiento a partir de la actuación anulada.

Sección Segunda

Reposición de Constancias de Autos

Artículo 68. El incidente de reposición de constancias de autos se tramitará de oficio o a petición de parte y, en ambos casos, se iniciará con la certificación del secretario sobre su preexistencia y falta posterior.

Artículo 69. El órgano jurisdiccional requerirá a las partes para que dentro del plazo de cinco días, aporten las copias de las constancias y documentos relativos al expediente que obren en su poder. En caso necesario, este plazo podrá ampliarse por otros cinco días.

Artículo 70. Transcurrido el plazo al que se refiere el artículo anterior, se citará a las partes a una audiencia, que se celebrará dentro de los tres días siguientes, en la que se hará relación de las constancias que se hayan recabado, se oirán los alegatos y se dictará la resolución que corresponda.

Si la pérdida es imputable a alguna de las partes, la reposición se hará a su costa, quien además pagará los daños y perjuicios que el extravío y la reposición ocasionen, sin perjuicio de las consecuencias penales que ello implique.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Capítulo X
Sentencias

Artículo 71. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la norma general o acto que la motivare.

Quando proceda hacer la declaración general de inconstitucionalidad se aplicarán las disposiciones del Título Cuarto.

En amparo directo, la calificación de los conceptos de violación en que se alegue la inconstitucionalidad de una norma general, se hará únicamente en la parte considerativa de la sentencia.

Artículo 72. La sentencia debe contener:

- I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;
- II. El análisis de los conceptos de violación o en su caso de los agravios;
- III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio;

IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer; y

V. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se conceda, niegue o sobreseer el amparo, en congruencia con la parte considerativa.

Artículo 73. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas distintas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante dicha autoridad.

El órgano jurisdiccional de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.

Artículo 74. El órgano jurisdiccional de amparo, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.

Artículo 75. Los efectos de la sentencia que concede el amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y

II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo el juzgador debe, para su estricto cumplimiento, precisar sus efectos.

Artículo 76. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá decidir si es constitucional; si puede considerarse conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al aplicarse según una determinada interpretación, o si debe considerarse inconstitucional.

En el último supuesto se declarará la invalidez de la norma general impugnada y los efectos se extenderán a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada.

Artículo 77. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en los casos siguientes:

I. En cualquier materia:

a) Cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo en el caso de que se haya emitido la declaración general de inconstitucional, en que deberá estarse, además a lo dispuesto por el Capítulo IV del Título Cuarto; y

b) En favor de los menores o incapaces;

II. En materia penal, en favor del reo;

III. En materia agraria, en los casos a que se refiere la fracción III del artículo 16 de la ley;

IV. En materia laboral, en favor del trabajador; y

V. En materias civil o administrativa, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación relevante de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el proceso en el que se dictó la resolución reclamada.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

En los casos de las fracciones I, inciso b), IV y V la suplencia se dará aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.

Capítulo XI Medios de Impugnación

Artículo 78. En el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación.

Sección Primera Recurso de Revisión

Artículo 79. Procede el recurso de revisión:

I. En amparo indirecto, contra las resoluciones siguientes:

a) Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia;

b) Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de esos autos; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente;

c) Las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos;

d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional;

e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia;

f) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado; y

g) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso; y

II. En amparo directo, en contra de las resoluciones siguientes:

a) Las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos u omitan decidir sobre tales cuestiones, siempre que aquéllas fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de su presidente.

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;

b) Contra las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito de amparo que decidan sobre el exce-

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

so o defecto en la ejecución de una sentencia de amparo directo dictada por ellos mismos, o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en revisión, siempre que en ella se haya declarado la inconstitucionalidad de una ley o determinado la interpretación directa de un precepto constitucional; y

c) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso.

Artículo 80. La parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por la contraria dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes. Su presentación y trámite se regirán, en lo conducente, por lo dispuesto en esta sección para la revisión principal, y seguirá la suerte procesal de ésta.

Los agravios en la revisión adhesiva pueden fortalecer las consideraciones de la sentencia que orientaron el resolutivo favorable al recurrente, o impugnar las que concluyen en un punto decisorio que le perjudica.

Artículo 81. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:

I. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o por los tribunales colegiados de apelación, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad; y

II. Contra las sentencias dictadas por un tribunal colegiado de circuito de amparo, en los casos a que se refiere la fracción II del artículo 79.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, y para una mejor impartición de justicia, mediante acuerdos generales distribuirá entre las salas los asuntos de su competencia o remitirá a los tribunales colegiados de circuito de amparo aquellos en los que hubiere establecido jurisprudencia, o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine.

Artículo 82. Son competentes los tribunales colegiados de circuito de amparo para conocer del recurso de revisión en los casos no previstos en el artículo anterior. Las sentencias que dicten en estos casos no admitirán recurso alguno.

Artículo 83. Cuando la Suprema Corte de Justicia estime que un amparo en revisión, por sus características especiales deba ser de su conocimiento, lo

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

atraerá oficiosamente conforme al procedimiento establecido en el artículo 38.

Artículo 84. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional de amparo que conozca del juicio.

La interposición del recurso en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia o ante el tribunal colegiado de circuito de amparo, no interrumpirá el transcurso del plazo a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 85. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto reclamado de cada una de ellas; pero tratándose de amparo contra normas generales, los titulares de los órganos de estado a los que se encomiende su promulgación podrán interponer en todo caso el recurso.

Tratándose de actos jurisdiccionales o de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, sólo podrán interponerlo quienes tengan el carácter de parte en el juicio o procedimiento del que deriva la resolución o el acto reclamado.

Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada, debiendo exhibirse copias para el expediente y para cada una de las partes.

Si el recurso se interpone en contra de una resolución dictada en amparo directo, el recurrente deberá transcribir textualmente la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la parte del concepto de violación respectivo cuyo análisis se hubiese omitido en la sentencia.

Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el primer párrafo, se requerirá al recurrente para que en el plazo de tres días lo haga; si no lo hiciere se tendrá por no interpuesto el recurso, salvo que se trate de actos restrictivos de la libertad o que afecten intereses de menores de edad o de incapaces, en los que el órgano jurisdiccional de amparo expedirá las copias correspondientes.

Artículo 87. Interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de agravios, el órgano jurisdiccional por conducto del cual se hubiere presentado las distribuirá entre las partes y remitirá el original con el expediente dentro del plazo de veinticuatro horas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al tribunal colegiado de circuito de amparo, según corresponda.

Artículo 88. Tratándose de resoluciones relativas a la suspensión definitiva, el expediente original del incidente de suspensión deberá remitirse en el plazo

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

de veinticuatro horas, quedando su duplicado ante el órgano jurisdiccional en contra de cuya resolución se haya interpuesto el recurso.

Artículo 89. El presidente del órgano jurisdiccional de amparo, según corresponda, dentro de los tres siguientes días a su recepción calificará la procedencia del recurso, admitiéndolo o desechándolo.

Artículo 90. Notificadas las partes del auto de admisión, transcurrido el plazo para adherirse a la revisión y, en su caso, tramitada ésta, se turnará de inmediato el expediente al ministro o magistrado que corresponda.

Turnado el expediente al ministro o magistrado ponente, deberá dictarse la resolución respectiva dentro del plazo máximo de treinta días.

Artículo 91. Al conocer de los asuntos en revisión el órgano jurisdiccional de amparo, observará las reglas siguientes:

I. Examinará, en primer término las causales de sobreseimiento aducidas en los agravios.

Si los agravios son infundados, examinará las causales que no hayan sido apreciadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o las que hayan surgido con posterioridad a la resolución impugnada.

De oficio podrá examinar y, en su caso, decretar la operancia de causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia;

II. Si se encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y que tales violaciones trascendieron al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento;

III. Examinará los agravios de fondo expuestos contra la resolución recurrida y cuando estime que son fundados, deberá considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador; y

IV. Sólo tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquéllas que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia.

Artículo 92. En la revisión adhesiva el estudio de los agravios podrá hacerse en forma conjunta o separada, atendiendo a la prelación lógica que establece el artículo anterior.

Artículo 93. Cuando en la revisión concurren materias que sean de la competencia de la Suprema Corte de Justicia y de un tribunal colegiado de circuito de

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

amparo, el asunto se remitirá a aquélla, la que resolverá exclusivamente en cuanto corresponda a su competencia, dejando a salvo, en su caso, la del tribunal colegiado de circuito.

Artículo 94. Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por tribunales colegiados, la Suprema Corte de Justicia únicamente resolverá sobre la constitucionalidad de la norma general impugnada, o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sección Segunda **Recurso de Queja**

Artículo 95. El recurso de queja procede:

I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:

- a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación;
- b) Las que concedan o nieguen la suspensión de oficio o la provisional;
- c) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su

naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; y

d) Las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios; y

II. En amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos:

a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga *indebidamente*;

b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del término legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes;

c) Contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios; y

d) Cuando niegue al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados.

Artículo 96. El plazo para la interposición del recurso de queja es de cinco días.

Cuando se trate de suspensión de oficio o provisional, el plazo es de veinticuatro horas.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

En el caso de la fracción II, inciso a), del artículo anterior, la queja podrá interponerse en cualquier tiempo.

Artículo 97. El recurso de queja deberá presentarse por escrito ante la autoridad que conozca del juicio de amparo.

En el caso de que se trate de actos de la autoridad responsable, el recurso deberá plantearse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio.

Artículo 98. En el escrito de queja se expresarán los agravios que cause la resolución recurrida; se anexará copia para cada una de las partes y se señalarán las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el recurso.

Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el párrafo anterior se requerirá al recurrente para que en el plazo de tres días lo haga; si no lo hiciere, se tendrá por no interpuesto el recurso, salvo que se trate de actos restrictivos de la libertad o que afecten intereses de menores o de incapaces, en los que el órgano jurisdiccional de amparo expedirá las copias correspondientes.

Artículo 99. El órgano jurisdiccional de amparo notificará a las partes y de inmediato remitirá copia de la resolución, las constancias solicitadas y las que

estime pertinentes al órgano jurisdiccional que corresponda.

La falta o deficiencia de los informes referidos en el párrafo anterior establece la presunción de ser ciertos los hechos respectivos.

Recibidas las constancias referidas en el primer párrafo, el órgano jurisdiccional de amparo dictará resolución dentro de los quince días siguientes, o dentro de las cuarenta y ocho horas en los casos del artículo 95, fracción I, inciso b).

Artículo 100. En los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto que por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, la interposición de la queja podrá suspender el procedimiento, siempre que, a juicio del órgano jurisdiccional, la resolución que se dicte en ella pueda influir en la sentencia, o cuando de resolverse el juicio en lo principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia.

Artículo 101. En caso de resultar fundado el recurso, el órgano jurisdiccional que conozca del mismo dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío; salvo en los casos que la resolución implique la reposición del procedimiento, en los que dejará sin efectos la resolución recurrida y ordenará al órgano jurisdiccional que la hubiere emitido dictar otra,

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

para lo cual precisará los efectos concretos a que deba sujetarse su cumplimiento.

Sección Tercera **Recurso de Reclamación**

Artículo 102. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos dictados en el juicio de amparo por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, o de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito.

Dicho recurso podrá interponerse por cualquiera de las partes, ante el órgano jurisdiccional correspondiente, expresando agravios, dentro del plazo de tres días.

Artículo 103. En el recurso de reclamación sólo podrán ofrecerse las pruebas documental y pericial. El recurrente deberá hacerlo en el escrito en que interpone el recurso y las demás partes en el plazo de tres días siguientes al de aquel en que surta sus efectos la notificación del auto admisorio.

Artículo 104. El órgano jurisdiccional que deba conocer el fondo del asunto, resolverá en un plazo máximo de diez días, debiendo ser ponente un ministro o magistrado distinto de su presidente.

Artículo 105. La reclamación fundada deja sin efectos la resolución recurrida y obliga al presidente que la hubiere emitido a dictar otra.